

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo dos de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan, por Evaristo Gamíño contra el ciudadano Prefecto de Morelia, por haberlo reducido á prision, sin hacerlo saber el motivo de ella, ni haberlo consignado á su Juez competente, en veinticuatro dias que llevaba el proceso, á la vez en que pidió el amparo; y considerando: que el hecho de que Gamíño se queja, aparece probado en el expediente, y que ese hecho importa la violacion de las garantías á que se refieren los arts. 19 y 20 de la Constitucion federal. Considerando tambien: que si estuvo en las facultades del Juzgado de Distrito de Michoacan, mandar suspender el acto dentro de veinticuatro horas, contadas desde que Gamíño presentó su queja, puesto despues el juicio en estado de sentencia, esta debió reducirse á conceder ó negar el amparo y no extenderse á mandar ejecutar lo sentenciado en primera instancia: se decreta:

1º Que se confirma la primera parte de la sentencia pronunciada el 15 de Febrero próximo pasado por el Juzgado de Distrito de Michoacan, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Evaristo Gamíño, contra la providencia dictada por el ciudadano prefecto del Distrito de Morelia, José Dolores Vargas, por haber sido violadas en su persona las garantías que otorgan los artículos 19 y 20 de la Constitucion federal.

2º Se revoca la segunda parte de la sentencia, que dice: "Se suspende la providencia dictada por el ciudadano Prefecto José Dolores Vargas, contra Evaristo Gamíño, librándose el oficio correspondiente, para los efectos del artículo 19 de la ley Orgánica de 20 de Enero de 1869.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de Michoacan, con copia certificada de esta sentencia para los efec-

tos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Únidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arceaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*L. Guzman.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Marzo siete de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustin Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Oajaca, por Rito Rafael, contra la providencia del C. Gefe político de Villa Alvarez, que lo consignó al servicio militar.

INFORME DEL C. GEFE POLÍTICO DE VILLA ALVARES, MANUEL MALDONADO.

Ciudadano Juez de Distrito:

Sorprendente y grande es el hecho de poner en el banquillo de los acusados á los funcionarios públicos, demandándoles la satisfaccion de sus procedimientos; pero satisfactorio para el empleado que con la conciencia de su deber y con la justificacion, ejerce su autoridad, y puede presentarse ante sus jueces y ante la sociedad entera, desnuda de toda responsabilidad. Ese es el acto que ha ejecutado Rito Rafael, en el escrito que presentó á vd. en 16 del mes que ya termina, y yo soy el empleado acusado á quien le toca justificar la remision de aquel, para reemplazo, en cumplimiento de su auto del 27 del mismo: paso á verificarlo con los comprobantes conducentes.

Nombrado Gefe Político y en todo el

ejercicio de mis deberes, recibí Orden del Gobierno del Estado, en Diciembre último, para remitir unos reemplazos que fueran ladrones y perniciosos en sus poblaciones, cuya Orden, me era obligatoria cumplir por la fracción 1ª del artículo 8º de la ley de administración y gobierno interior del mismo, de Noviembre 16 de 1857, en cuyo caso pedí al pueblo de Zachila á los hombres y los remití, hallándose entre ellos José María Lázaro, quien resultó inútil, y me fué devuelto por comunicacion de 8 del mes que ya termina, en la cual se me piden tres por uno inútil, como se vé de su contenido, que para comprobacion remito en copia certificada y bajo el número 1. Despues me fueron devueltos tambien por inútiles Matías Arellano y Francisco Benito, con el oficio de 14 del mismo mes, cuya copia acompaño bajo el número 2, en cuyo concepto, se me pido su reposicion, ambas Órdenes apremiantes tambien, por la misma fracción 1ª del artículo 8º de la ley citada, y tuve que cumplirlas pidiendo á San Pablo Huistepec los cinco individuos que tuvieran las circunstancias descadas por el Gobierno; mi Orden fué cumplidamente observada, remitiéndome á los cinco hombres con el informe correspondiente, el cual se vé en el documento número 3 que tambien acompaño, y entre los remitidos se encuentra Rito Rafael, el autor de la acusacion. Con todo lo expuesto, queda justificado y plenamente probado, que mi procedimiento ha sido legal y no arbitrario.

Para robustecer su escrito, dice que violó las garantías individuales que le otorgan las leyes que cita, y que sin oírlo y sin informarme de su conducta lo consigné al servicio de las armas; por cuyo motivo, ni atendí á su corta edad ni al pago de la contribucion que impuso el decreto de 27 de Diciembre de 1859. Pero á lo primero, diré: que descansando en el dicho de la autoridad de su pueblo, deberia haberme atendido al concepto del artículo 1º de la ley general de 9 de Abril del año próximo pasado; pues aunque no lo juzgaba por algun robo,

sí lo deberia considerar sin las garantías que ha perdido por su vicio en robar, como lo dice su autoridad. En cuanto á lo segundo, de no oírlo, tambien manifesto no ser cierto, pues consta que el presidente de Huistepec, Tomás Aquino, al recibirlos é interrogarlos, no manifestó Rafael y otros estar exonerados del servicio por el pago de la contribucion extraordinaria; en cuanto á lo tercero, de decir que tiene catorce años, lo desmiente su mismo dicho, pues si es cierto que pagó la contribucion y obtuvo su documento comprobante, los que causaron ese impuesto, fueron, segun la misma ley, los contribuyentes de capitacion que deben ser de diez y seis años cumplidos; en cuyo caso queda destruido con su mismo dicho el alegato de la falta de edad.

Este es, ciudadano Juez, el informe justificado de su auto arriba citado, y del cual se vé que mis procedimientos han sido legales y fundados, y pido por lo mismo que vd. se sirva declararme sin responsabilidad alguna.

Villa Alvarez, Enero treinta de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*Manuel Maldonado.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

Este Ministerio, impuesto de los presentes autos, pide á vd. que por las razones que pasa á alegar, no ampare á Rito Rafael, de San Pablo Huistepec, consignado al Gobierno del Estado por el ciudadano Geffe Político de Villa Alvarez, Manuel Maldonado, y destinado al servicio de las armas en el ejército permanente, como pernicioso.

El interesado alega, que por tal procedimiento han sido violadas en su persona las garantías que conceden los artículos 5º y 20 de la Constitucion federal. Bastará demostrar que el caso no está comprendido en estos artículos, y que tanto el Gobierno

del Estado, como el ciudadano Gefe Político de Villa Alvarez, han obrado con autorizacion, para deducir por consecuencia forzosa, que Rito Rafael no es digno de la proteccion que concede el artículo 101 de la Constitucion.

Por la ley de 28 de Mayo de 1869, se mandó que las bajas del ejército se cubrieran por medio del sorteo ó enganches, pero en consideracion á las dificultades que habia habido para el arreglo de una de las dos cosas, el tiempo trascurrió, y haciéndose preciso á juicio del soberano de la Union reemplazar de alguna manera las bajas del ejército, se facultó al ejecutivo de la misma Union por el artículo 2º del decreto de 17 de Enero de 1870, para que se proporcionara, del modo que lo creyera mas eficaz, los reemplazos de que vengo hablando. Por esta última disposicion, que viene á ser derogatoria de la anterior, bien claro se deja comprender, que el Supremo Poder legislativo de la federacion, amplió las facultades del Ejecutivo, para que sin sujecion á las dos únicas maneras que determinó la ley citada de 28 de Mayo de 1869, se proporcionara los reemplazos del ejército nacional.

El Gobierno del Estado, obrando en el particular con sujecion á órdenes superiores, ha hecho su asignacion á los Distritos del mismo para que remitan individuos á propósito para el servicio del ejército nacional, procurando que sean perniciosos á las poblaciones, hombres de mala conducta y personas que á la vez que son malos ciudadanos, puedan ser buenos servidores de la patria como militares.

El ciudadano Gefe Político de Villa Alvarez, circuló sus órdenes á los presidentes y agentes municipales de los pueblos de su Distrito, en consonancia con las que le comunicó el Gobierno del Estado; de manera, que en el caso en que se pone el interesado al manifestar que no es pernicioso, y que ademas, sostiene con su personal trabajo á tres hermanos menores, culpa será del presidente de Huistepec su consignacion inme-

recida, y no del Gefe Político, supuesto que aquel vive en el mismo pueblo, y por esta razon debe tener mejor conocimiento de su conducta.

El artículo 5º de la Constitucion general dice así: "Nadie puede ser obligado á prestar trabajos personales, sin la justa retribucion y sin su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar ningun contrato que tenga por objeto, la pérdida ó el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educacion ó de voto religioso. Tampoco puede celebrar convenios en que el hombre padezca su proscripcion ó destierro." Comprende este tres partes: en cuanto á la primera, que trata de trabajos personales, es preciso entender, que cuando dice personales, no se refiere al que sirve, sino al que es servido, pues en tal caso por este precepto constitucional, quedarian insubsistentes las cargas conseejiles y todos los demas servicios públicos que son de vital importancia para la organizacion de las sociedades, y que no están retribuidos. El servicio militar no es un servicio personal siguiendo el principio sentado, sino público; por cuyo fundamento se infiere claramente, que no está comprendido en la primera parte del precepto constitucional que nos preocupa.

El soldado es un empleado de la Nacion como cualquiera otro: á su empleo hay anexas obligaciones que menoscaban en parte su libertad, es cierto; pero no se sigue de tal servicio la pérdida de ésta, pues en tal caso, solo el holgazan, el vago, el mal entretenido, disfrutarían y podría decirse que gozaban de esta garantía. ¿Que empleado, desde el primer Magistrado de la República hasta el último, no tiene anexas obligaciones á su empleo? Los Magistrados, los financieros y los militares, están sujetos á estatutos y ordenanzas, para el desempeño de sus mismos empleos. ¿Y podrá decirse que porque el Magistrado se entrega durante las horas que la ley señala, á la resolution de los negocios que tiene á su cargo; que porque el empleado de hacienda concurre dia-

riamente á su oficina, en los periodos que la misma ley señala; que porque el militar está presente en su cuartel para desempeñar las fatigas de ordenanza, y que porque tanto éste, como los anteriores, por negligencia y falta de cumplimiento á sus deberes, quedan sujetos á la pena que la misma ley señala, se infiera que han perdido su libertad? claro es que no, porque en tal caso caeríamos en el absurdo de considerar, por pérdida de libertad, cualquier trabajo á que el hombre se destinara.

Los que consideran el servicio militar como causa esencial de que el hombre pierda su libertad, han degradado, y si se quiere, formado un concepto muy desfavorable de tan honroso encargo.

Los soldados del ejército permanente no son esclavos sino empleados de la federación, servidores de la Patria, en quien ésta apoya su soberanía é independencia.

Tampoco puede decirse que esté comprendido el caso en el tercer período del artículo que se glosa, pues Rito Rafael, de San Pablo Huistepec, no ha pactado con nadie su proscripción ó destierro.

El artículo 20 de la Constitución general, concede á los acusados criminalmente las garantías de que se les haga saber el motivo del procedimiento, el nombre del acusador; que se les tome su declaración preparatoria; que se les carce con los testigos etc., etc. Con respecto al quejoso, no se ha instruido un proceso en forma, como consecuencia de un delito de que haya sido acusado, se le ha mantenido en detención únicamente, para evitar que quedaran ilusorias las disposiciones de la autoridad, mediante la fuga que podría emprender, como era muy natural, supuesto que fué destinado contra su voluntad al servicio de las armas.

Por estas sencillas razones, se deduce, que en la persona del quejoso, en rigor de derecho, no debe decirse, que hayan sido violadas las garantías que concede nuestra carta política federal en su artículo 20 citado.

Oaxaca, Febrero siete de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*S. Suenga.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Oaxaca, Febrero diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el presente juicio seguido por Rito Rafael, natural y vecino del pueblo de Huistepec del Distrito de Zimatlan, soltero, de catorce años de edad y labrador, solicitando amparo contra la providencia del ciudadano Gefe Político Manuel Maldonado, que lo consignó al servicio del ejército en clase de reemplazo; visto igualmente el informe del expresado Gefe Político en el que manifiesta, que descansando en el dicho de la autoridad del pueblo del quejoso, debería haberse atendido al concepto del artículo 19 de la ley general de 9 de Abril del año próximo pasado, pues aunque no lo juzgaba por algun robo, si lo debería considerar sin las garantías que ha perdido por sus vicios en robar. Visto asimismo el pedimento del ciudadano Promotor Fiscal, en el que con fundamento de la ley de 17 de Enero de 1870, pretende se niegue el amparo que se solicita, por no estar violadas en la persona del expresado Rito Rafael, las garantías que concede la Constitución general en su artículo 29. Considerando: que el enunciado Rito Rafael, ha acompañado á su escrito de queja el recibo (fojas 13) de haber pagado la contribucion de un peso que exige el decreto de 27 de Diciembre de 1869, expedido por el Congreso de este Estado, para quedar exento del servicio de las armas como reemplazo; que el acto del ciudadano Gefe Político, de haber consignado al ciudadano Rito Rafael al servicio del ejército sin su voluntad, ni menos previa audiencia y defensa, importa una violacion en su persona de las garantías que reconoce el artículo 49 de la Constitución citada; que aunque si bien pudiera ser cierto que el quejoso tuviera el vicio de robar, no por

eso se debería aplicar, como pena, el servicio de las armas, sino que debía sujetársele á juicio conforme á las leyes respectivas. Y teniéndose en consideracion la poca edad del quejoso, que con su trabajo personal alimenta á tres hermanos menores, huérfanos, y todo lo demas que ver convino. La Justicia Federal declara:

Primero. Que ampara y protege á Rito Rafael, contra el acto por el cual se pasó por cajas para servir como reemplazo en el ejército, y se le tiene encarcelado.

Segundo. A su vez diríjase atenta comunicacion con testimonio del presente fallo, al ciudadano Presidente de la República, para que se digne mandar dar de baja del depósito de reemplazos al repetido Rito Rafael.

Tercero. Publíquese y remítase á la Suprema Corte de Justicia de la Union para los efectos de la ley.

El ciudadano Juez de Distrito lo decretó y firmó.—Doy fé.—*Joaquin Manileon.*
—*Juan Rey.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo tres de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por el ciudadano Rito Rafael, natural y vecino de Huistepec, contra la disposicion del Gefe Político de Villa Alvarez, por la cual fué reducido á prision y consignado al servicio de las armas en calidad de reemplazo; visto el informe de la autoridad contra cuyos actos se ha solicitado el recurso, los documentos presentados por el Gefe Político, lo alegado por el Ministerio Público, la sentencia del Juez de Distrito de Oaxaca que concedió el amparo, y cuanto se tuvo presente y ver convino. Considerando: Que la Gefatura Política de Villa Alvarez, al mantener en prision á Rito Rafael, y consig-

narlo como reemplazo al servicio de las armas, ha violado en la persona del peticionario las garantías que otorgan los artículos 5º y 20 de la Constitución general de la República. Considerando: en cuanto á la 2ª parte de la sentencia del Juez de Distrito de Oaxaca, que la ley de 20 de Enero de 1869, dice terminantemente en su artículo 28, que "el efecto de una sentencia que concede amparo, es: *que se restituyan las cosas al estado que guardaban antes de violarse la Constitución*" y sin necesidad de otro recurso. Se decreta:

1º Que es de confirmarse y se confirma la 1ª parte de la sentencia pronunciada por el referido Juzgado, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al ciudadano Rito Rafael, contra la consignacion hecha por la Gefatura Política de Villa Alvarez, que mandó al quejoso como reemplazo al servicio de las armas en el ejército permanente.

2º Por el fundamento indicado se revoca la 2ª parte de la referida sentencia, que ordena se libre atento oficio y testimonio del fallo al ciudadano Presidente de la República, para que se digne mandar dar de baja, en el depósito de reemplazos al promovente.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Marzo nueve de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Pe-
ralta*, oficial mayor.